TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ACUERDO G/JGA/63/2015 por el que se dan a conocer los parámetros para la elaboración de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de publicarse, así como para generar información estadística.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Junta de Gobierno y Administración.

ACUERDO G/JGA/63/2015

PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SENTENCIAS QUE EMITA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE PUBLICARSE, ASÍ COMO PARA GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

Acuerdo General G/JGA/63/2015 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece los parámetros para la elaboración de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de publicarse, así como para generar información estadística.

CONSIDERANDO

1. De conformidad con el artículo 6o., apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la información en posesión de cualquier autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes y, que en términos de la fracción II del apartado ya señalado, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, estará protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;

2. El pasado cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. Constitucional;

3. El artículo 70, fracción XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como una obligación de transparencia de los sujetos obligados, poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, y que en términos del último párrafo del mismo artículo se establece que los sujetos obligados deberán informar a los Organismos Garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional de Transparencia.

4. El artículo 3o., fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define como versión pública al documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

5. El artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, precisando que las nuevas obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 70 de dicha Ley, serán aplicables sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

6. De conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tanto no se expida la Ley General en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia, es decir, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracción XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Tribunal debe hacer pública las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

8. Con el objetivo de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a todas las personas y sujetos obligados, respecto del alcance y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil quince.

9. Que en el numeral 7.4 de las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se precisa que la información relacionada con las nuevas obligaciones de transparencia, comprenderá aquella que generen los sujetos obligados a partir del cinco de mayo de dos mil quince.

10. El artículo 39, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que la Junta de Gobierno y Administración es el órgano del Tribunal que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, contando con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y que en términos de las fracciones I y XXII del artículo 41 de la misma Ley, es facultad de la Junta de Gobierno y Administración expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal y dirigir la buena marcha del mismo, dictando las medidas necesarias;

11. En términos de lo dispuesto por los artículos 46 y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a la Junta de Gobierno y Administración ejercer la vigilancia y disciplina en este Órgano Jurisdiccional, entendiéndose por vigilancia la actividad tendente a supervisar que los actos y funciones jurisdiccionales y administrativas se realicen por los órganos, unidades y servidores públicos del Tribunal conforme a la normatividad aplicable, y por disciplina la actividad tendente a verificar que los servidores públicos de esta Institución observen las normas, reglas o lineamientos que las leyes, la Junta u otros órganos competentes establezcan, para lo cual emitirá los acuerdos y las disposiciones de orden y buen gobierno que correspondan, teniendo el carácter de obligatorios y de observancia general en el Tribunal;

En consecuencia, con fundamento en los artículos 6o., Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XXI, 70, fracciones XXX y XXXVI, Tercero y Octavo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 39 y 41, fracciones I y XXII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 46 y 47, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la Junta de Gobierno y Administración emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. El presente acuerdo tiene como objeto establecer los parámetros en relación a la obligatoriedad que tiene el Tribunal para generar versiones públicas de las sentencias que emita, a efecto de publicarse en el Buscador de Sentencias de este Tribunal, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Dichos parámetros permitirán eliminar u omitir las partes o secciones clasificadas como información reservada o confidencial, atendiendo al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

De igual forma, regular la captura de datos dentro del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, así como dentro del Sistema de Justicia en Línea, para generar la información estadística jurisdiccional del Tribunal, con la mayor desagregación posible.

Segundo. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

- I. **Buscador de Sentencias:** Aplicación informática ubicada en la página de internet del Tribunal, en la que deberán estar las versiones públicas de las sentencias;
- II. **Clasificación:** Acto por el cual las unidades administrativas o jurisdiccionales, determinan que la información contenida en una resolución es pública, reservada o confidencial;
- III. **Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;

- IV. Datos personales sensibles:** Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste;
- V. Información Confidencial:** Aquella que actualiza los supuestos contenidos en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los previstos en el artículo 8 del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es decir, la que contiene datos personales o información que haya sido entregada con dicho carácter por los ciudadanos a este Tribunal;
- VI. Información Reservada:** Aquella que actualiza los supuestos contenidos en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los previstos en los artículos 7 y 9 del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la cual se considerará como denegado temporalmente el acceso a la información;
- VII. Tribunal:** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- VIII. Unidad de Enlace:** El área administrativa del Tribunal que actúa como vínculo entre los solicitantes y las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el Tribunal, a efecto de facilitar el acceso a la información;
- IX. Versión Pública de Sentencia:** Sentencia emitida por el Tribunal, en la que se eliminan u omiten las partes o secciones clasificadas como información reservada o confidencial.

Tercero. Para la elaboración de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribunal, deberá analizarse cada caso en concreto, pudiendo eliminarse u omitirse de las partes o secciones los siguientes datos:

- I.** Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que identifique o haga identificable a una persona, así como las firmas de la parte actora, representantes y personas autorizadas, terceros interesados, peritos, testigos y cualquier otra persona referida en las constancias del expediente o en la propia sentencia.
- II.** Características físicas e intelectuales descriptivas de las personas, como: color de piel, cabello, iris, estatura, peso, complexión, edad, tipo de sangre, ADN, huella digital, entre otras.
- III.** Estado de salud físico y/o mental de las personas, como: historial clínico, alergias, enfermedades, información de carácter psicológico o psiquiátrico, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, discapacidad, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, padecimientos, trastornos, entre otros.
- IV.** Los números del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), Números de Seguridad Social (NSS), cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, o cualquier otro conjunto de números, letras o caracteres que conformen alguna clave vinculada a una persona.
- V.** El domicilio, número de teléfono y cuenta de correo electrónico de personas.
- VI.** Números de cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio de una persona física o moral, así como números de cheques, pagarés, letras de cambio, pólizas de fianza, estados de cuenta, entre otros.
- VII.** Los datos de registro e identificación de vehículos, con la excepción de aquellos que tienen el carácter de institucionales, o bien, los asignados a los servidores públicos para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, deberán tomarse en consideración aquellos criterios de reserva y confidencialidad de información, contenidos en las disposiciones legales aplicables a cada caso, como ejemplo aquéllos relacionados con secretos comerciales e industriales, cuya titularidad corresponda a particulares cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Tratándose de documentos impresos o electrónicos en formato de imagen, los datos que pudieran eliminarse u omitirse de las partes o secciones, deberán sustituirse por un cintillo negro.

Cuarto. Como excepciones a los datos anteriormente mencionados y que no podrán eliminarse u omitirse de las partes o secciones de las versiones públicas de las sentencias, se citan de manera enunciativa, mas no limitativa los siguientes:

I. Servidores públicos:

- a) Nombre y firma cuando actúen en ejercicio de sus funciones.
- b) Nombre cuando sean parte actora de los juicios materia de este tribunal, cuando devenga de su actuar dentro del ejercicio de la función pública.
- c) Puesto, remuneraciones y prestaciones.
- d) Domicilio, número de teléfono y cuentas de correo electrónico institucionales.
- e) Ni las relacionadas con las cantidades del daño patrimonial que en su caso se hubiera declarado por parte de las autoridades correspondientes.

II. Documentos públicos:

- a) Número de oficios y autoridad que los emite.
- b) Fechas de oficios.
- c) Número y fechas de publicación de tesis de jurisprudencias, entre otros.

Quinto. Las ponencias que integran el Pleno y las Secciones de Sala Superior, así como las de Salas Regionales de este Tribunal, serán las responsables de elaborar las versiones públicas de las sentencias que proyecten para su votación.

En el caso de existir votos particulares o disidentes, éstos deberán incluirse, toda vez que forman parte de la sentencia.

La Unidad de Enlace podrá opinar sobre las versiones públicas emitidas por las unidades jurisdiccionales, procurando que prevalezca el principio de máxima publicidad.

Sexto. Las versiones públicas de las sentencias se elaborarán en todo momento sobre copias electrónicas o impresas idénticas del documento original, para lo cual resultará indispensable efectuar un cotejo previo antes de iniciar el análisis de los datos que puedan eliminarse u omitirse de las partes o secciones, con el objeto de garantizar la integridad de la información.

Se privilegiará en todo momento la elaboración de versiones públicas en formato electrónico. Para tales efectos la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pondrá a disposición de las áreas jurisdiccionales las herramientas tecnológicas que tengan disponibles para tales efectos.

Séptimo. En el caso de la elaboración de versiones públicas de las sentencias en formato electrónico de texto (Word, txt, etc.), se realizará la eliminación u omisión de las partes o secciones correspondientes, mediante la sustitución de la información por asteriscos.

Tratándose de documentos electrónicos en formato de imagen o impresos, los datos cuya eliminación u omisión sea necesaria deberán sustituirse por un cintillo negro. En este caso deberá digitalizarse la sentencia en un formato electrónico que permita su inclusión en el Buscador de Sentencias del Tribunal.

Octavo. La eliminación u omisión de las partes o secciones de la información clasificada como reservada o confidencial de las versiones públicas de las sentencias, deberá estar debidamente fundada y motivada.

Para tales efectos, al final de la versión pública de las sentencias que se hayan elaborado, ya sea en medio electrónico o físico, deberá de insertarse la siguiente leyenda:

“De conformidad con lo dispuesto por el/los artículo (s) ____ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y/o en el/los artículo (s) ____ del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fueron suprimidos de esta versión pública (agregar datos que fueron eliminados) información considerada legalmente como (especificar si es información reservada o confidencial), por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos”.

Noveno. Las versiones públicas a las que se refiere este acuerdo, serán publicadas a través del Buscador de Sentencias del Tribunal, y formarán parte de la Plataforma Nacional de Transparencia a la que se hace referencia en el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Décimo. Las ponencias que integran el Pleno y las Secciones de Sala Superior, así como las de Salas Regionales de este Tribunal, estarán obligadas a realizar la captura de la información que sea requerida a través del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, así como del Sistema de Justicia en Línea, según corresponda.

Los datos contenidos en estos sistemas, serán insumo para la generación de la información estadística a publicar, y tendrá como fecha de corte el último día de cada mes.

Para la correcta generación de la información estadística, los acuerdos genéricos de instrucción de Magistrados podrán utilizarse únicamente cuando no exista un acuerdo específico referido en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, así como en el Sistema de Justicia en Línea, sin que puedan emplearse para generar altas o bajas en dichos Sistemas.

Décimo primero. Las disposiciones del presente acuerdo son de carácter obligatorio para todos los servidores públicos encargados de emitir sentencias en este Tribunal y el incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en el presente acuerdo será objeto de responsabilidades administrativas para los servidores públicos, de conformidad a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo mediante el cual se establecen los parámetros para la elaboración de versiones públicas de las sentencias que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de publicarse, así como para la generación de información estadística, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno y Administración.

Segundo. Las disposiciones emitidas por el Tribunal que contravengan el presente acuerdo quedarán sin efectos.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet del Tribunal.

Cuarto. Otórguense las facilidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.

Dictado en sesión de fecha treinta de junio de dos mil quince, por unanimidad de votos de los Magistrados Héctor Francisco Fernández Cruz, Juan Ángel Chávez Ramírez, David José del Carmen Jiménez González, Alfredo Salgado Loyo y Manuel L. Hallivis Pelayo.- Firman el Magistrado **Manuel L. Hallivis Pelayo**, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada **Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo**, Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe; con fundamento en los artículos 30, fracción XV y 52, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los artículos 16, fracción VI, 78, fracciones VIII y XI, y 103, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Rúbricas.

(R.- 415457)

ACUERDO E/JGA/17/2015 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo E/JGA/14/2013, que contiene el Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Junta de Gobierno y Administración.

ACUERDO E/JGA/17/2015

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ACUERDO E/JGA/14/2013, QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE VIGILANCIA DEL DESEMPEÑO JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA LAS SALAS REGIONALES, ESPECIALIZADAS, AUXILIARES Y/O MIXTAS, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Acuerdo Específico E/JGA/17/2015 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reforma y adiciona el Acuerdo E/JGA/14/2013, que contiene el Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CONSIDERANDO

1. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo con autonomía para dictar sus fallos para dirimir las controversias entre la administración pública federal y los particulares, conforme lo establece el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso Octavo Transitorio, último párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015;

2. El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tribunales del país estarán expeditos para impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a garantizar a los gobernados este derecho humano contenido en la Carta Magna de manera puntual;

3. La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 39 de su Ley Orgánica, es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, que cuenta con autonomía técnica y de gestión para realizar sus funciones. El artículo 41, fracciones I y XXII, de esta Ley, le faculta para expedir los acuerdos para el buen funcionamiento de la institución y dirigir su buena marcha, dictando las medidas necesarias;

4. En términos de lo dispuesto por los artículos 46 y 47, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a la Junta de Gobierno y Administración ejercer la vigilancia y disciplina en este Órgano Jurisdiccional, entendiéndose por vigilancia la actividad tendiente a supervisar que los actos y funciones jurisdiccionales y administrativas se realicen por los órganos, unidades y servidores públicos del Tribunal conforme a la normatividad aplicable, y por disciplina la actividad dirigida a verificar que los servidores públicos de esta Institución observen las normas, reglas o lineamientos que las leyes, la Junta u otros órganos competentes establezcan, para lo cual emitirá los acuerdos y las disposiciones de orden y buen gobierno que correspondan, teniendo el carácter de obligatorios y de observancia general en el Tribunal.

De conformidad con el citado artículo 46, inciso b), segundo párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal, la vigilancia se efectuará, entre otros, por cualesquiera actuaciones que la Junta de Gobierno y Administración determine para el mejor cumplimiento de su función.

5. Mediante Acuerdo E/JGA/14/2013, dictado por la Junta de Gobierno y Administración en sesiones de veinte y veintisiete de junio y cuatro de julio de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil trece, se estableció el Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

6. En sesión de veinticuatro de junio de dos mil catorce, la Junta de Gobierno y Administración reformó el mencionado Reglamento de Vigilancia mediante Acuerdo E/JGA/28/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de dos mil catorce, para esclarecer los procedimientos para las solicitudes de correcciones en los Sistemas del Tribunal, derivado de la mejora administrativa y de la evolución institucional impulsada con la adopción del Sistema de Justicia en Línea y sus Subsistemas, en especial el Subsistema de Juicio Tradicional;

7. De conformidad con el artículo 54, fracción VII, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, los Magistrados Visitadores deben verificar, entre otros aspectos, la existencia de condiciones adecuadas del clima laboral y de las medidas establecidas para propiciar la armonía y la convivencia ordenada del personal jurisdiccional y administrativo de las Salas.

8. Para reforzar el buen funcionamiento del Tribunal y los esquemas de protección de los derechos humanos acorde a las tendencias del Derecho moderno, la Junta de Gobierno y Administración estima necesario establecer el procedimiento de mediación como medio alternativo para solucionar controversias que se susciten entre los servidores públicos de esta Institución, fomentando así el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir entre éstos, mismo que tendrá por objeto la reconciliación amistosa entre las partes en conflicto, enfocándose en sus necesidades.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso Octavo Transitorio, último párrafo, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015; 39 y 41, fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en relación con los diversos 46, inciso b), 47 y 54, fracción VII, del Reglamento Interior del mismo, la Junta de Gobierno y Administración tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

Único.- Se reforma y adiciona el artículo 2; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 28, y el Capítulo III al Título Tercero del Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contenido en el Acuerdo E/JGA/14/2013, recorriéndose en su orden los artículos subsecuentes; para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. ...

Igualmente se atenderá a los siguientes conceptos:

- I. **Acuerdo:** Solución consensual que construyen los mediados, bajo la tutela del mediador, para cada uno de los puntos controvertidos en el conflicto durante el desarrollo de la mediación, y que deberá ser formalizado mediante convenio, ante la Junta de Gobierno y Administración;
- II. **Asunto:** ...
- III. **Confidencialidad:** Información generada por las partes durante la mediación, misma que no podrá ser divulgada, salvo que de ello se desprenda una falta grave o delito cometido por alguno de los mediados o cualquier otro servidor público de este Tribunal;
- IV. **Convenio:** Conjunto de cláusulas que contienen los acuerdos celebrados entre los mediados, respecto de la solución del conflicto motivo de la mediación, asentados en un documento;
- V. **Demandas Recibidas:** ...
- VI. **Equidad:** Los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio entre los mediados, para obtener acuerdos recíprocamente satisfactorios;
- VII. **Expediente:** ...
- VIII. **Flexibilidad:** La mediación carecerá de toda forma rígida, ya que deriva de la voluntad de los mediados;
- IX. **Imparcialidad:** Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener ésta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas para alguno de los mediados;
- X. **Mediación:** Procedimiento por medio del cual se busca la solución amigable a un conflicto suscitado entre servidores públicos del Tribunal, mediante la intervención de un tercero aceptable, imparcial y neutro, carente de valor de decisión y habilitado para ayudar a los involucrados para alcanzar un arreglo voluntario aceptable de los temas en discusión;
- XI. **Mediador:** Magistrado integrante de la Junta de Gobierno y Administración, con calidad de Visitador de la Sala Regional a la que se encuentren adscritos los servidores públicos involucrados en un conflicto, discrepancia o controversia, o bien, aquél que sea designado por la Junta para resolver una controversia suscitada en un área que por su naturaleza no cuente con un Magistrado Visitador específico, quien de manera imparcial, conducirá el procedimiento de mediación y facilitará la comunicación y la negociación entre los involucrados;
- XII. **Mediados:** Servidores públicos adscritos al Tribunal involucrados en conflicto, discrepancia o controversia y que buscan una solución pacífica a la misma;
- XIII. **Neutralidad:** Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantenerla exenta de juicios, opiniones y perjuicios propios respecto de los mediados, que puedan influir en la toma de decisiones;
- XIV. **Objetividad:** Es la actitud que el mediador debe adoptar, atendiendo a la necesidad de los mediados, sin que derive en su interés personal;

XV. Pliego: ...

XVI. Profesionalismo: Actuar de manera responsable y seria sobre cualquier acto que pueda mermar en la respetabilidad propia de su cargo;

XVII. Salas Mixtas: Salas Regionales que tienen jurisdicción en una circunscripción territorial o materia específica asignadas en el Reglamento Interior y que, sin perder esa jurisdicción y facultades instructoras auxilian en el dictado de sentencias definitivas a otras Salas Regionales, y

XVIII. Terceros: Tendrán ese carácter todas aquellas personas que, a petición de los interesados o a consideración del mediador puedan contribuir en la solución del conflicto.

Artículo 28. ...

I. ...

II. ...

Si durante la práctica de las visitas o fuera de ellas, se detectan conflictos que pudieran afectar el clima laboral, el Magistrado Visitador fungirá como mediador, sujetándose al procedimiento previsto en este Reglamento, y

III. ...

TÍTULO TERCERO

...

CAPÍTULO III.**DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN.**

Artículo 53. La mediación es un proceso privado y voluntario al cual podrán someterse los servidores públicos de este Tribunal cuando exista una controversia o conflicto que dificulte la armonía y buen funcionamiento de la Sala o área respectiva, con la finalidad de llegar a una amigable composición, fortaleciendo así la vida institucional y el respeto a los derechos laborales del personal administrativo y jurisdiccional. El procedimiento de mediación deberá regirse por los principios de confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, objetividad, bilateralidad, equidad, flexibilidad y profesionalismo.

Artículo 54. Son partes en el procedimiento de mediación:

I. Mediados;

II. Mediador, y

III. Terceros.

Artículo 55. El procedimiento de mediación podrá iniciarse de oficio, cuando el Magistrado competente, por cualquier medio y con motivo de sus funciones, conozca de un conflicto entre servidores públicos del Tribunal que afecte la labor jurisdiccional. O bien se iniciará a petición de alguno de los servidores públicos involucrados, en donde el mediador intervendrá para facilitar la comunicación directa y confidencial entre los involucrados con el propósito de que éstos lleguen por sí mismos a un acuerdo voluntario que ponga fin a la controversia suscitada.

Artículo 56. Las solicitudes de mediación podrán hacerse del conocimiento del Magistrado competente por cualquiera de los medios de comunicación existentes en el Tribunal, mismas que deberán contener cuando menos la siguiente información:

I. Nombre y firma de la persona que solicite la mediación, así como su área de adscripción;

II. Nombre del servidor o servidores públicos involucrados en la controversia, así como el cargo y área de adscripción del mismo en caso de que conozca dicha información, y

III. Exposición breve del asunto controvertido, así como los datos o indicios que permitan la identificación de los puntos en conflicto.

Artículo 57. El Magistrado competente al que corresponda el asunto, hará del conocimiento a la Junta de la existencia de un conflicto a mediar, respetando siempre el principio de confidencialidad que debe prevalecer en el procedimiento de mediación, el cual comienza con la audiencia inicial y concluye con la audiencia final.

Artículo 58. El mediador, como facilitador del proceso, y atendiendo a la esfera del conflicto y a sus causas, podrá fijar tantas audiencias como estime pertinentes a fin de realizar las intervenciones necesarias para recopilar información y documentación acerca de la disputa, realizar entrevistas con las partes y demás involucrados o llevar a cabo cualquier otra gestión que estime pertinente para el mejor conocimiento de los hechos.

Tratándose de Salas o áreas con sede distinta al Distrito Federal, el Mediador deberá asistir a la audiencia inicial y final, y podrá designar a un comisionado que lo asista para la celebración de las demás audiencias, quien le dará cuenta de los resultados de dichas reuniones.

De estimarlo necesario, el Magistrado mediador podrá efectuar visitas extraordinarias, previa aprobación de la Junta.

Artículo 59. Durante la audiencia inicial de mediación, el mediador recordará a los mediados el objeto y alcance de la mediación, explicará las reglas básicas y pautas de comportamiento que deben prevalecer durante el proceso, celebrará con ellos el convenio de confidencialidad correspondiente respecto de la información que en las sesiones se trate, delimitará las áreas temáticas y las cuestiones en discusión y en su caso determinará una secuencia para el manejo de los temas en discusión. Asimismo, les informará sobre la posibilidad de dar por terminada la mediación, si así conviene a las necesidades e intereses de los mediados o si el mediador detecta violación a las reglas sobre las que deben conducirse éstos durante la investigación.

Artículo 60. El mediador auxiliará a los mediados a compartir información fomentando el diálogo amable entre las partes y mediante la instrumentación de entrenamiento empático, promoviendo así entre las partes el conocimiento de la necesidad de generar opciones o alternativas para solucionar el conflicto, atendiendo a las necesidades e intereses de las partes y reduciendo en lo posible el alcance y número de las discrepancias existentes.

Basado en el principio de flexibilidad, el mediador buscará que las partes definan, adopten, acepten y respeten voluntariamente el procedimiento para reconciliar sus intereses y evalúen los alcances y beneficios de cada una de las alternativas de solución.

Artículo 61. En la audiencia final de mediación, se buscará la negociación definitiva entre las partes para alcanzar un acuerdo consensual formal, mismo que deberá detallar los pasos generales y específicos requeridos para aplicar la decisión, precisando si la naturaleza del acuerdo permite su ejecución inmediata, o si es necesario el establecimiento de un plazo, o en su caso si el mismo requerirá de una conducta permanente. Asimismo, se establecerán los métodos para supervisar el acatamiento a tales acuerdos.

El convenio celebrado entre las partes deberá redactarse de manera clara y precisa, evitando que las cláusulas propicien dudas que deriven en errores o interpretaciones subjetivas. Para ello, el mediador buscará en todo momento aclarar las intenciones de las partes y explicará a detalle el significado y alcance de las cláusulas que lo componen.

Artículo 62. Los acuerdos a los que se sometan los mediados generarán un compromiso entre los mismos, que deberá ser respetado en cada uno de sus términos y se harán del conocimiento de la Junta, correspondiendo al Magistrado Visitador, o en su caso, a aquel que al efecto designe la propia Junta, la supervisión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Artículo 63. Se dará por concluida de manera anticipada la mediación, cuando de lo expuesto en las audiencias se advierta la presencia de conductas irregulares desplegadas por alguno de los servidores públicos involucrados en la mediación.

Artículo 64. Si con motivo de la mediación el mediador conoce de la comisión de alguna falta grave o de algún delito, se investigará a través de los medios correspondientes, sin que ello implique violación al convenio de confidencialidad celebrado con las partes.

TÍTULO CUARTO.

CAPÍTULO ÚNICO.

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.

SECCIÓN I

DE LA EVALUACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

Artículo 65. Durante el mes de enero de cada año, los Magistrados visitadores presentarán a la Junta el Acta-Informe que contenga los documentos a que se refiere el artículo 1, fracción II, inciso h), así como todos aquellos elementos recabados durante el proceso de vigilancia y visita, ordinaria o extraordinaria, incluyendo el reporte anual de observaciones y recomendaciones sobre la situación de las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, a que alude el último párrafo del artículo 54 del Reglamento Interior.

El plazo señalado en el párrafo anterior será aplicable también a los Magistrados visitadores que concluyen su encargo en la Junta, ya que ellos presentarán en el referido mes de enero el Acta-Informe y el reporte de observaciones y recomendaciones sobre la situación de las Salas visitadas, incorporando los datos del mes de diciembre, en los términos del artículo 15, último párrafo, de este ordenamiento.

Artículo 66. Las Actas-Informes y demás información que rendirán los Magistrados visitantes, serán presentadas en medios electrónicos que permitan su concentración, homologación y sistematización, de manera que facilite su interpretación global, segmentada e interactiva, sobre la situación que guarden el Tribunal, las Salas, Magistrados y personal jurisdiccional y administrativo que lo integran.

Artículo 67. Durante el mes de febrero de cada año, la Junta evaluará el funcionamiento de las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas por la anualidad anterior, tomando como base el resultado de las evaluaciones a distancia; las actas levantadas con motivo de las visitas; las recomendaciones y observaciones producidas y los demás documentos que se generen durante las visitas o actividades de vigilancia.

La evaluación podrá realizarse de manera global, por periodos o rubros parciales, o por Regiones y grupos de servidores públicos específicos, de tal suerte que los resultados obtenidos sustenten las políticas de planeación estratégica y la toma de decisiones institucionales para el buen funcionamiento del Tribunal y para la ejecución de las medidas conducentes a su mejora continua.

SECCIÓN II

PREVENCIONES FINALES.

Artículo 68. La Junta podrá reunirse en cualquier tiempo, a propuesta de alguno de sus integrantes, para comentar, analizar, evaluar o tomar, en su caso, las medidas que fueren necesarias, con motivo de las visitas realizadas durante el ejercicio, o de sucesos o eventos fuera de visita, inclusive para establecer los cambios de adscripción de Magistrados numerarios o supernumerarios que se estimen convenientes para la buena marcha de la Región o Sala que así lo ameriten.

Artículo 68. Los asuntos que surjan en el Proceso de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo que no estén previstos en este Reglamento, serán resueltos por el Magistrado visitador que corresponda, en consonancia con los objetivos establecidos en el presente ordenamiento y en el Reglamento Interior, tomando debida nota de esa circunstancia en el acta o informe respectivo.

En todo caso, el Magistrado visitador y su personal de apoyo estarán dotados de las atribuciones necesarias y suficientes para llevar a buen fin las comisiones que tengan encomendadas.

Artículo 70. En caso de que se haga necesario indagar sustancialmente asuntos de índole administrativa, la Junta, o en su caso el Magistrado visitador, podrán solicitar el apoyo técnico necesario de cualquier unidad administrativa del Tribunal, incluida la Contraloría Interna.

Artículo 71. En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones que se establecen en este Reglamento, se procederá en los términos siguientes:

- a) El Magistrado visitador exhortará al obligado para que, en el término perentorio que determine, proceda a ejecutar la acción que corresponda o para que justifique fehacientemente las causas del incumplimiento; y
- b) De persistir el incumplimiento, o si se trata de un caso que la Junta considere de gravedad, el mismo Órgano Colegiado requerirá al obligado para que atienda de inmediato lo conducente, apercibiéndolo de que, si persiste el incumplimiento, se dará inicio al correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidades de servidores públicos.

Artículo 72. En casos de duda sobre la interpretación y alcance de las disposiciones de este Reglamento, la Junta determinará lo conducente, y resolverá cualquier situación técnica o administrativa no prevista en el mismo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para su debida difusión, publíquese el presente Acuerdo en la página web institucional del Tribunal, así como en la Comunidad de Control y Vigilancia Jurisdiccional.

Dictado en sesión de fecha siete de julio de dos mil quince, por unanimidad de votos de los Magistrados Héctor Francisco Fernández Cruz, Juan Ángel Chávez Ramírez, David José del Carmen Jiménez González, Alfredo Salgado Loyo y Manuel L. Hallivis Pelayo.- Firman el Magistrado **Manuel L. Hallivis Pelayo**, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada **Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo**, Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe; con fundamento en los artículos 30 fracción XV, 52 fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los artículos 16 fracción VI, 78 fracciones VIII y XI, y 103, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Rúbricas.

(R.- 415456)

ACUERDO E/JGA/18/2015 por el que se establecen las Disposiciones del Marco de Control Interno Institucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Junta de Gobierno y Administración.

ACUERDO E/JGA/18/2015

DISPOSICIONES DEL MARCO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Acuerdo Específico E/JGA/18/2015 de la Junta de Gobierno y Administración, por el que se establecen las disposiciones del Marco de Control Interno Institucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el 4 de julio de 2013 la Auditoría Superior de la Federación comunicó a la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el inicio del Estudio General de la Situación que guarda el Control Interno Institucional en el Sector Público Federal;

SEGUNDO. Que el 9 de diciembre de 2013 la Auditoría Superior de la Federación informó a la Presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el resultado del Estudio General de la Situación que guarda el Sistema de Control Interno en el Sector Público Federal;

TERCERO. Que en el citado estudio la Auditoría Superior de la Federación plantea como acción de mejora, implantar un modelo o marco de control interno institucional en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

CUARTO. Que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que la Junta de Gobierno y Administración, es el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, contando con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones y que en términos de las fracciones I, XXII y XXIII del artículo 41 de la misma Ley, es facultad de la Junta de Gobierno y Administración expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal y dirigir la buena marcha del mismo, dictando las medidas que para tal efecto resulten necesarias;

QUINTO. Que el artículo 46, fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que la Junta de Gobierno y Administración ejercerá sus funciones con autonomía técnica y de gestión para dictar las disposiciones normativas de carácter obligatorio y de observancia general que regulen y den eficacia y eficiencia a sus actividades;

SEXTO. Que el artículo 76, fracciones I, V, VI, XV, XIX y XX, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen que la Secretaría Operativa de Administración, está facultada para elaborar y someter a la aprobación de la Junta las políticas, programas, normas, estudios, proyectos, sistemas, procedimientos y acuerdos internos de las áreas de su responsabilidad; evaluar la situación presupuestal y financiera del Tribunal y proponer las medidas preventivas y correctivas que estime convenientes; verificar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación que emitan las autoridades en el ámbito de su competencia; coordinar los programas relacionados con la modernización y mejoramiento administrativo, el desarrollo organizacional, la transparencia y la rendición de cuentas; coordinar la planeación de los temas y asuntos de su competencia que deban ser sometidos a consideración de la Junta y presentar a la Secretaría Auxiliar la información y documentación correspondiente a los asuntos de su competencia que deban ser sometidos a la consideración de la Junta;

SÉPTIMO. Que el artículo 77, fracciones I, II, VI y XI, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establecen que la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está facultada para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico del Tribunal; revisar y presentar a la Junta el Programa Institucional en TICs, así como las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción para su desarrollo y supervisar su ejecución, en coordinación con las áreas competentes del Tribunal; revisar y determinar las acciones relacionadas con la administración de riesgos en el ámbito de TICs e implementar indicadores de gestión y medidas para asegurar el cumplimiento del Programa Institucional en TICs y presentar a la Secretaría Auxiliar la información y documentación correspondiente a los asuntos de su competencia que deban ser sometidos a la consideración de la Junta;

OCTAVO. Que el artículo 94, fracciones VI y X, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen que la Contraloría Interna está facultada para supervisar que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sean atendidas por los servidores públicos correspondientes, con la debida oportunidad, realizar auditorías de desempeño y promover las medidas preventivas que correspondan;

NOVENO. Que en la actualidad el control interno tiene una relevancia hacia el interior de las entidades públicas o privadas, al ayudar a lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales con eficiencia, eficacia y economía, fomentar la integridad y el combate a la corrupción, prevenir la materialización de riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos, coadyuvar a la obtención y presentación de información financiera y de operación en términos de confiabilidad y oportunidad, favorecer el cumplimiento del marco legal y normativo y fortalecer la transparencia y el proceso de rendición de cuentas;

DÉCIMO. Que con el fin de mantener y mejorar la excelencia en el desarrollo de las funciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resulta necesario establecer un documento formal en materia de control interno, que permita regular y asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 39 y 41, fracciones I, XXII y XXIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 46 y 47 de su Reglamento Interior, esta Junta de Gobierno y Administración ha tenido a bien expedir el siguiente:

**ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DEL MARCO DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA**

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 2.- Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:

- I. **Administración de Riesgos:** Proceso sistemático que permite identificar, analizar, evaluar, controlar y dar seguimiento a los riesgos asociados a una actividad, operación o proceso, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan prevenirlos y administrarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas del Tribunal de una manera razonable;
- II. **Áreas:** Unidades definidas dentro de la estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- III. **Comité:** El Comité de Control Interno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- IV. **Componentes:** Los cinco elementos que conforman el Modelo de Control Interno, con base en COSO: Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación, y Supervisión;
- V. **Control Interno:** Proceso que proporciona un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución, atendiendo los temas específicos de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, de supervisión, de información y comunicación; con base en las mejores prácticas internacionales en materia de Control Interno conforme al COSO;
- VI. **COSO:** Siglas en inglés que corresponden al The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas); y es la metodología empleada para la implantación del Sistema de Control Interno Institucional;
- VII. **Evaluación de Riesgos:** Proceso mediante el cual se lleva a cabo la medición de la magnitud del impacto que tendría la ocurrencia de un riesgo, y de la probabilidad de que ocurra;
- VIII. **Información y Comunicación:** Establecimiento de canales abiertos que fomentan la colaboración entre los servidores públicos para el logro de los objetivos y metas institucionales;
- IX. **Mejora Continua:** Proceso encaminado a incrementar y optimizar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, mediante el uso de indicadores y la elaboración de metas y objetivos susceptibles de ser cumplidos y evaluados periódicamente.

- X. Servidor Público:** Toda persona designada o nombrada para ocupar un puesto, cargo o comisión en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;
- XI. Sistema:** El Sistema de Control Interno Institucional;
- XII. Sistema de Control Interno:** El Conjunto de componentes que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica para dar certidumbre a la toma de decisiones, así como una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley; y
- XIII. Tribunal:** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 3.- El Control Interno tiene como finalidad contribuir y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos de la institución, a través de:

- I. Fomentar la integridad y el combate a la corrupción.
- II. Prevenir la materialización de riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos.
- III. Protección de los activos (bienes muebles, inmuebles e informáticos).
- IV. Coadyuvar a la obtención y presentación de información financiera y de operación en términos de confiabilidad y oportunidad.
- V. Refleja la relevancia de implementar y utilizar las Tecnologías de la Información.
- VI. Observar y dar el cumplimiento del marco legal y normativo.
- VII. Fortalecer la transparencia y el proceso de rendición de cuentas.

Artículo 4.- Para la interpretación del presente Acuerdo será competente el Comité.

Artículo 5.- Los Servidores Públicos adscritos a las diferentes áreas administrativas del Tribunal, tendrán a su cargo la participación, control, inspección y el cumplimiento del contenido de las presentes disposiciones, así como atender con oportunidad los compromisos que se generen con su implementación y demás que, en su caso, emita el Comité.

Artículo 6.- El Comité será el responsable de supervisar que se cumpla con lo establecido en las presentes disposiciones.

Artículo 7.- El Titular de la Contraloría Interna a través del servidor público que designe, asesorarán en el ámbito de su competencia a los servidores públicos en la implementación de lo establecido en estas disposiciones, asimismo, será la responsable de impulsar, vigilar y evaluar la aplicación adecuada de las mismas.

Artículo 8.- Las presentes disposiciones deberán revisarse cuando menos una vez al año, con la finalidad de llevar a cabo su actualización, en los casos necesarios, por la Contraloría Interna, previa opinión del Comité, para autorización de la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 9.- En la instrumentación, fortalecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, el Comité y los servidores públicos del Tribunal en el ámbito de su competencia, deberán observar la normatividad que emita la Junta de Gobierno y Administración, en relación con los componentes de Control Interno.

TÍTULO SEGUNDO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CAPÍTULO I

AMBIENTE DE CONTROL

Artículo 10.- Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan o constituyen la base para que los distintos componentes se implementen e impacten en la calidad de todo el Control Interno Institucional.

El Comité y la Contraloría Interna son quienes marcan la pauta respecto de la importancia del control interno y los estándares de conducta esperados en el Tribunal, el ambiente de control considera: un entorno y clima organizacional de respeto, sensibilización en equidad de género, integridad con actitud de compromiso y congruente con los valores éticos en estricto apego al marco jurídico que rige en el Tribunal; planeación estratégica institucional autorizada, actualizada y difundida; estructura organizacional autorizada, actualizada y difundida; manuales de organización y procedimientos con una clara definición de responsabilidades,

desagregación y delegación de funciones; políticas y prácticas adecuadas en materia de recursos humanos; políticas y sistema para la evaluación del desempeño; todo lo anterior, alineados en su conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales, lo que contribuirá a fomentar la transparencia, rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente.

Para contribuir a un ambiente de control favorable al logro de la misión y objetivos estratégicos del Tribunal en un marco de transparencia, integridad y rendición de cuentas, se deberán observar los siguientes principios:

- I. El Tribunal, por conducto de los servidores públicos de mandos superiores, medios y resto de personal, deberán demostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, la equidad de género y los valores éticos, contenidos en los códigos o normas jurídicas establecidos, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción, con la finalidad de promover el comportamiento acorde a la misión y visión de este Tribunal.
- II. El Comité y la Contraloría Interna a través del servidor público que designe ejercerán la supervisión en el funcionamiento y desempeño del sistema de control interno institucional.
- III. La Secretaría Operativa de Administración y conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, deberá establecer y someter a autorización la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.
- IV. La Secretaría Operativa de Administración tendrá el compromiso para atraer, desarrollar y retener a los individuos (servidores públicos) competentes, en alineación con los objetivos del Tribunal.
- V. El Comité con apoyo del servidor público que designe la Contraloría Interna evaluará el desempeño del control interno institucional del Tribunal y hace responsable a los servidores públicos para que asuman sus obligaciones en materia de control interno institucional para la consecución de los objetivos y metas estratégicos.

CAPÍTULO II

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Artículo 11.- El riesgo se define como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos y las metas estratégicos. La administración de riesgos implica un proceso dinámico e iterativo que evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el Tribunal y que puedan afectar el logro eficaz y eficiente de los objetivos estratégicos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar líneas de acción (respuestas) que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.

Los servidores públicos de mandos superiores y medios, según proceda, deberán considerar los cambios en el entorno externo y en el ámbito interno que puedan disminuir o impedir la capacidad para alcanzar los objetivos y metas estratégicas, para lo cual se deberán tomar en consideración los siguientes principios:

- I. La Secretaría Operativa de Administración conjuntamente con la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán definir los objetivos y metas estratégicas con la claridad y detalle suficiente para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con dichos objetivos y metas;
- II. El Comité con apoyo del servidor público que designe la Contraloría Interna deberá identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del Tribunal, inherentes a la naturaleza de los procesos, operaciones, sistemas, actividades, equipos e instalaciones, así como analizar los factores (externos/internos) que inciden en tales riesgos, y determinar las estrategias y programas de mitigación para administrarlos y controlarlos a un grado razonable;
- III. El Comité debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que se realizan en el Tribunal.
- IV. El Comité, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno, de tal manera que este no resulte afectado.

CAPÍTULO III

ACTIVIDADES DE CONTROL

Artículo 12.- Son las acciones establecidas, a través de políticas, lineamientos, manuales de procedimientos, descripción de funciones y puestos, entre otros, para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de los responsables de las unidades administrativas, para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información.

Los servidores públicos de mandos superiores y medios, según proceda, serán responsables de establecer y mantener actualizados los controles internos en sus respectivos ámbitos de competencias, para lo cual se deberán tomar en consideración los siguientes principios:

- I. El Comité y la Contraloría Interna a través del servidor público que designe debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.
- II. El Comité y la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deben diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos.
- III. El Comité debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimiento y otros medios de similar naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente establecidas. Asimismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos los procesos.

CAPÍTULO IV

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Artículo 13.- La comunicación es el proceso continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener información (tanto de fuentes internas como externas) relevante y de calidad que las Secretarías Operativa de Administración, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Comité y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a las presentes disposiciones.

Los Servidores Públicos de las áreas administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, tomarán en cuenta los principios que se determinen por el Comité y la Contraloría Interna a través del servidor público que designe para contribuir a la transparencia, calidad, integridad, oportunidad y seguridad de la información institucional, así como al establecimiento de canales de comunicación abiertos que fomenten la colaboración entre las propias Áreas y los Servidores Públicos, para el logro de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento del marco normativo aplicable, de conformidad con lo siguiente:

- I. La Secretaría Operativa de Administración, la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Comité y la Contraloría Interna deben implementar los medios que permitan a las unidades administrativas generar y utilizar información relevante y de calidad que respalde el funcionamiento del sistema de control interno para la consecución de los objetivos institucionales.
- II. La Secretaría Operativa de Administración y la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son responsables de que las unidades administrativas comuniquen interna y externamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información relevante y de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.

CAPÍTULO V

SUPERVISIÓN

Artículo 14.- Son las actividades establecidas y operadas por las áreas administrativas que defina las Secretarías Operativas de Administración, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Comité, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno institucional mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de los servidores públicos de mando superiores y medios en cada uno de los procesos que realizan.

La supervisión contribuye a la optimización permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados.

Las evaluaciones deben ser realizadas por la Contraloría Interna del Tribunal a través del servidor público que designe, con el propósito de asegurar que los controles establecidos estén cumpliendo su función, en su caso, que los riesgos y debilidades identificadas sean comunicados a quienes tienen la responsabilidad de administrarlos o subsanarlos.

Los resultados de las evaluaciones deberán ser comunicados oportunamente por la Contraloría Interna del Tribunal a través del servidor público que designe, como un asunto relevante, al Comité para conocimiento y seguimiento de las acciones de fortalecimiento que correspondan, los principios de este componente son:

- I. Los servidores públicos de mandos superiores y medios, deberán establecer en el ámbito de su competencia las actividades necesarias para la adecuada supervisión del control interno institucional y la evaluación de sus resultados.
- II. Los servidores públicos de mandos superiores y medios, son responsables en el ámbito de su competencia de corregir oportunamente las deficiencias de control interno institucional detectadas. Asimismo, deberán comunicarlo en tiempo y forma al Comité.

Artículo 15.- El titular de la Contraloría Interna del Tribunal a través del servidor público que designe de conformidad con su marco de atribuciones y funciones, deberá incluir en sus programas anuales de trabajo la revisión a los sistemas de control y administración de riesgos de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes para el control de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos institucionales, así como la verificación del cumplimiento de las presentes disposiciones.

CAPÍTULO VI DE LA MEJORA CONTINUA

Artículo 16.- Los servidores públicos de las diversas áreas administrativas en el ámbito de sus competencias y facultades, deberán tomar en cuenta los principios fundamentales para la implementación de un sistema de mejora continua, que asegure la calidad en los procesos y sistemas de trabajo, para establecer las bases de control y prevención que permitan lograr los objetivos estratégicos y metas institucionales.

CAPÍTULO VII DE LA EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Artículo 17.- El Comité y la Contraloría Interna a través del servidor público que designe realizarán por lo menos una vez al año, la autoevaluación del estado que guarda el control interno, mismo que se deberá informar a la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 18.- La autoevaluación del control interno se realizará mediante la aplicación de la encuesta que para tal efecto el Comité determine y comunique por escrito o a través de los medios electrónicos a los servidores públicos titulares de las áreas administrativas sustantivas del Tribunal.

Artículo 19.- Como resultado de la aplicación de las encuestas, se llevará a cabo la integración y seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), el cual deberá considerar:

- a) Las acciones de mejora determinadas en las encuestas aplicadas;
- b) La fecha de inicio y término;
- c) Área administrativa responsable de su implementación;
- d) Los medios de verificación de las acciones llevadas a cabo; y
- e) Nombre y firma del Titular del área responsable.

En su caso, se incorporará en el PTCI las recomendaciones emitidas por los órganos fiscalizadores y evaluadores.

Artículo 20.- El seguimiento del PTCI se realizará de manera trimestral por parte del Comité, a través del Reporte de avance trimestral que para tal efecto se establezca, informando a la Junta de Gobierno y Administración dichos avances.

TÍTULO TERCERO
DE LA METODOLOGÍA, PARTICIPANTES Y FUNCIONES
EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Artículo 21.- Para el cumplimiento del componente Administración de Riesgos, establecido en el artículo 11 de las presentes disposiciones, en las actividades a realizar se observará la metodología establecida en el documento denominado “**Guía de autoevaluación de riesgos en el sector público**”, emitido por la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 22.- Para la instrumentación de la metodología de Administración de Riesgos será el Comité de Control Interno Institucional del Tribunal, quien conformará un equipo de trabajo integrado por servidores públicos de la Secretaría Operativa de Administración, la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Contraloría Interna, a través del servidor público que designe, quienes llevarán a cabo las actividades que se establecen en la “**Guía de autoevaluación de riesgos en el sector público**”, emitida por la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 23.- Como resultado de las actividades realizadas en el artículo anterior, se elaborarán los documentos que se indican en la guía, consistente en:

- a) Mapa de Riesgo Institucional;
- b) Matriz General de Riesgos; y
- c) Programa de Administración de Riesgos.

Artículo 24.- Se deberán presentar al Comité por conducto de la Contraloría Interna del Tribunal a través del servidor público que designe, en la sesión que corresponda los documentos establecidos en el artículo 23 de las presentes disposiciones, cuyo seguimiento se realizará de manera trimestral por parte del Comité, a través del Reporte de avance trimestral que para tal efecto se establezca.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 60 días siguientes de su aprobación por la Junta de Gobierno y Administración.

Segundo. Para su debida difusión, publíquese el presente acuerdo en el sitio web de este Tribunal y en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se Instruye a la Secretaría Operativa de Administración, a la Secretaría Operativa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que en el ámbito de sus atribuciones dentro del término establecido en el transitorio Primero conformen un grupo de trabajo en el que se establezcan e implementen las acciones tendientes a la aplicación del Marco de Control Interno Institucional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cuarto. Dentro de un plazo de 90 días naturales a la autorización del presente acuerdo por parte de la Junta de Gobierno y Administración, la Secretaría Operativa de Administración en el ámbito de su competencia, deberá instrumentar las acciones necesarias para la creación e integración del Comité, el cual funcionará de conformidad con el Manual de Integración y Funcionamiento que apruebe la Junta de Gobierno y Administración.

Dictado en sesión de fecha siete de julio de dos mil quince, por unanimidad de votos de los Magistrados Héctor Francisco Fernández Cruz, Juan Ángel Chávez Ramírez, David José del Carmen Jiménez González, Alfredo Salgado Loyo y Manuel L. Hallivis Pelayo.- Firman el Magistrado **Manuel L. Hallivis Pelayo**, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada **Xóchilt Guadalupe Cobián Manzo**, Secretaria Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, quien da fe; con fundamento en los artículos 30 fracción XV, 52 fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como los artículos 16 fracción VI, 78 fracciones VIII y XI, y 103, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

(R.- 415455)